



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA

Tunja, trece (13) de agosto de dos mil veinte (2020)

Referencia: Protección de Derechos e Intereses Colectivos
Demandante: Propietarios y arrendatarios Edificio In-Altezza
Propiedad Horizontal y vecinos del barrio El Dorado
Demandado: Municipio de Tunja y otros
Radicación: 15001 3333 003 **2020 00062 00**

I. ASUNTO

El Despacho pasa a pronunciarse sobre la admisión de la acción popular de la referencia.

II. CONSIDERACIONES

- De las pretensiones de la demanda

Revisada la demanda se observa que los accionantes presentaron dos pretensiones principales a saber:

1. El ajuste de la estratificación con base en las realidades socioeconómicas del sector, la ubicación de los predios, entre otros aspectos; que se calcule y determine el detrimento y daño económico a los afectados a fin de reembolsar valores pagados a empresas de servicios públicos domiciliarios en lo establecido a tarifas de cobro, según estratificación determinada en el evento de fijar una estratificación más baja y se reconozca además una indemnización a cada copropietario afectado.
2. La adecuación y pavimentación de las vías deterioradas de sector, la construcción de andenes, así como las demás obras necesarias para proteger la vida, el espacio público y los bienes de los ciudadanos afectados.

Con base en lo anterior, el Despacho considera que existe una indebida acumulación de pretensiones, porque estas resultan excluyentes entre sí, comoquiera que la primera pretensión se encuentra encaminada a obtener la protección de derechos de carácter patrimonial, por tanto, subjetivos, y el reconocimiento de las correspondientes indemnizaciones. Es decir, se identifica en el grupo demandante la conjunción de intereses individuales o particulares afectados por un evento lesivo común, cuya pretensión indemnizatoria es propia de la acción de grupo. En tanto la segunda pretensión se considera relacionada con la protección de derechos o intereses colectivos, sin contenido subjetivo, propia de la acción popular, en la que no se persigue un resarcimiento de tipo económico.

Si bien el medio de control de protección e intereses colectivos o acción popular puede tener un carácter indemnizatorio, debe recordarse que el mismo opera cuando se cause un daño a un derecho o interés colectivo, y que por disposición del artículo 34 de la Ley 472 de 1998, la condena al pago de perjuicios solo procede frente a la entidad pública que los tenga a su cargo, con fines de restauración.

Así las cosas, la demanda presentada no puede tramitarse respecto a estas dos pretensiones, de manera que corresponde a la parte accionante determinar por cuál de ellas habrá de continuar el trámite, y adecuar la demanda al medio de control que corresponda, con base en los requisitos previstos en las Leyes 472 de 1998 y 1437 de 2011, así:

NORMA PROCESAL	PROTECCIÓN DE DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS – ACCIÓN POPULAR–	REPARACIÓN DE PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO – ACCIÓN DE GRUPO –
LEY 472 DE 1998	<p>ARTICULO 13. EJERCICIO DE LA ACCION POPULAR. Los legitimados para ejercer acciones populares pueden hacerlo por sí mismos o por quien actúe en su nombre.</p> <p>Cuando se interponga una acción popular sin la intermediación de un apoderado judicial, la Defensoría del Pueblo podrá intervenir, para lo cual, el juez deberá notificarle el auto admisorio de la demanda.</p> <p>ARTICULO 18. REQUISITOS DE LA DEMANDA O PETICION. Para promover una acción popular se presentará una demanda o petición con los siguientes requisitos:</p> <p>a) La indicación del derecho o interés colectivo amenazado o vulnerado;</p> <p>b) La indicación de los hechos, actos, acciones u omisiones que motivan su petición;</p> <p>c) La enunciación de las pretensiones;</p> <p>d) La indicación de la personas natural o jurídica, o la autoridad pública presuntamente responsable de la amenaza o del agravio, si fuere posible;</p> <p>e) Las pruebas que pretenda hacer valer;</p> <p>f) Las direcciones para notificaciones;</p>	<p>ARTICULO 49. EJERCICIO DE LA ACCION. <u>Las acciones de grupo deben ejercerse por conducto de abogado.</u></p> <p>Cuando los miembros del grupo otorguen poder a varios abogados, deberá integrarse un comité y el juez reconocerá como coordinador y apoderado legal del grupo, a quien represente el mayor número de víctimas, o en su defecto al que nombre el comité.</p> <p>ARTICULO 52. REQUISITOS DE LA DEMANDA. La demanda mediante la cual se ejerza una acción de grupo deberá reunir los requisitos establecidos en el Código de Procedimiento Civil o en el Código Contencioso Administrativo, según el caso, y además expresar en ella:</p> <p>1. El nombre del apoderado o apoderados, anexando el poder legalmente conferido.</p> <p>2. La identificación de los poderdantes, identificando sus nombres, documentos de identidad y domicilio.</p> <p>3. El estimativo del valor de los perjuicios que se hubieren ocasionado por la eventual vulneración.</p>

	<p>g) Nombre e identificación de quien ejerce la acción.</p> <p>La demanda se dirigirá contra el presunto responsable del hecho u omisión que la motiva, si fuere conocido. No obstante, cuando en el curso del proceso se establezca que existen otros posibles responsables, el juez de primera instancia de oficio ordenará su citación en los términos en que aquí se prescribe para el demandado.</p>	<p>4. Si no fuere posible proporcionar el nombre de todos los individuos de un mismo grupo, expresar los criterios para identificarlos y definir el grupo.</p> <p>5. La identificación del demandado.</p> <p>6. La justificación sobre la procedencia de la acción de grupo en los términos de los artículos 30. y 49 de la presente ley.</p> <p>7. Los hechos de la demanda y las pruebas que se pretendan hacer valer dentro del proceso.</p> <p>PARAGRAFO. La demanda se dirigirá contra el presunto responsable del hecho u omisión que la motiva, el cual debe ser determinado. No obstante, cuando en el curso del proceso se establezca que existen otros posibles responsables, el juez de primera instancia, de oficio ordenará su citación.</p>
<p>LEY 1437 DE 2011</p>	<p>“ARTÍCULO 144. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS. Cualquier persona puede demandar la protección de los derechos e intereses colectivos para lo cual podrá pedir que se adopten las medidas necesarias con el fin de evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los mismos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible.</p> <p>Cuando la vulneración de los derechos e intereses colectivos provenga de la actividad de una entidad pública, podrá demandarse su protección, inclusive cuando la conducta vulnerante sea un acto administrativo o un contrato, sin que en uno u otro evento, pueda el juez anular el acto o el contrato, sin perjuicio de que pueda adoptar las medidas que sean necesarias para hacer cesar la amenaza o vulneración de los derechos colectivos.</p> <p>Antes de presentar la demanda para la protección de los derechos e</p>	<p>ARTÍCULO 145. REPARACIÓN DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO. Cualquier persona perteneciente a un número plural o a un conjunto de personas que reúnan condiciones uniformes respecto de una misma causa que les originó perjuicios individuales, puede solicitar en nombre del conjunto la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado y el reconocimiento y pago de indemnización de los perjuicios causados al grupo, en los términos preceptuados por la norma especial que regula la materia.</p> <p>Cuando un acto administrativo de carácter particular afecte a veinte (20) o más personas individualmente determinadas, podrá solicitarse su nulidad si es necesaria para determinar la responsabilidad, siempre que algún integrante del grupo hubiere agotado el recurso administrativo obligatorio.</p>

	<p>intereses colectivos, <u>el demandante debe solicitar a la autoridad o al particular en ejercicio de funciones administrativas que adopte las medidas necesarias de protección del derecho o interés colectivo amenazado o violado.</u> Si la autoridad no atiende dicha reclamación dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación de la solicitud o se niega a ello, podrá acudir ante el juez. Excepcionalmente, se podrá prescindir de este requisito, cuando exista inminente peligro de ocurrir un perjuicio irremediable en contra de los derechos e intereses colectivos, situación que deberá sustentarse en la demanda.”</p> <p>“ARTÍCULO 161. REQUISITOS PREVIOS PARA DEMANDAR. La presentación de la demanda se someterá al cumplimiento de requisitos previos en los siguientes casos:</p> <p>(...)</p> <p>4. Cuando se pretenda la protección de derechos e intereses colectivos se deberá efectuar la reclamación prevista en el artículo <u>144</u> de este Código.”</p> <p>El requerimiento previo como requisito de procedibilidad, consiste en la solicitud expresa de la adopción de medidas tendientes a proteger los derechos e intereses colectivos. Es decir, que la reclamación previa a la autoridad o al particular en ejercicio de funciones administrativas debe hacerse dentro de un contexto específico delimitado por la amenaza o vulneración del interés o derecho colectivo que se intenta proteger.</p>	
--	--	--

De acuerdo con lo anterior, se insiste, la parte demandante deberá precisar cuál es la pretensión que persigue, y determinar si está en ejercicio de una acción de grupo o de una acción popular. Seguidamente, según el medio de control elegido, deberá

adecuar la demanda con el cumplimiento de los requisitos previstos en las Leyes 472 de 1998 y 1437 de 2011, que se encuentran relacionados en esta providencia.

Ahora bien, en consideración a que la presente demanda se presentó bajo la denominación de acción popular, según lo establecido en el artículo 20 de la Ley 472 de 1998, el Juzgado concederá el término de tres (3) días para efecto de que se corrijan los aspectos señalados en esta providencia.

- De la vigencia del Decreto Legislativo 806 de 2020

En virtud del Decreto Legislativo 806 de 2020, que contiene normas procesales concernientes a la sustanciación de los procesos ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por disposición del principio general de la aplicación inmediata de las leyes procesales¹, corresponde aplicar a las previsiones del referido Decreto, norma que entró en vigencia a partir del 04 de junio del año que avanza.

En este orden, la parte demandante deberá remitir simultáneamente a los correos electrónicos de la parte demandada para efecto de su notificación, al Ministerio Público delegado ante este Despacho (procjudadm177@procuraduria.gov.co) y a este Juzgado (correspondenciajadm177@cendoj.ramajudicial.gov.co) el escrito de subsanación de la demanda junto con todos sus anexos.

Además, la parte demandante deberá aportar el certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica R.A. Constructores S.A.S., en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 4.º del artículo 166 del CPACA.

Por lo expuesto, el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Tunja

RESUELVE

PRIMERO.- Inadmitir la demanda de protección de derechos e intereses colectivos (acción popular) presentada por los propietarios y arrendatarios Edificio In-Altezza Propiedad Horizontal y vecinos del barrio El Dorado contra el municipio de Tunja y R.A. Constructores S.A.S.

¹ Código General del Proceso. Artículo 624. *Modifíquese el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual quedará así:*

“Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.

Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtir las notificaciones.

La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el momento de formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad”.

SEGUNDO.- Conceder a la parte demandante el término de tres (03) días para que corrija y subsane los defectos de la demanda anotados en la parte motiva de esta providencia, so pena de rechazo.

Conforme el artículo 6.º del Decreto 806 de 2020, al presentar la subsanación de la demanda, deberá enviar simultáneamente por medio electrónico, copia de esta y de sus anexos a los demandados, al Ministerio Público y a este Despacho, y allegar la correspondiente constancia.

Además, la parte demandante deberá aportar el certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica R.A. Constructores S.A.S., dentro del término señalado.

Notifíquese² y cúmplase

Firmado Por:

**ANGELA MARIA JOJOA VELASQUEZ
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 004 ADMINISTRATIVO DE TUNJA**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

8d2bca0e33e85796d028cfa6ce96a5227d730ecaa7edfd1af84fdda50479518e

Documento generado en 13/08/2020 03:44:01 p.m.

2

**Juzgado Cuarto Administrativo de Oralidad
del Circuito de Tunja**

NOTIFICACIÓN POR ESTADO

La anterior providencia se notifica por
estado electrónico N.º 21
de hoy 14 de agosto de 2020, a las 8:00 a. m.

FERNEY MAURICIO DÍAZ HERNÁNDEZ
Secretario